



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: ILONIA JURKO VÁSQUEZ
Demandados: ACP COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 015 2021 00301 01
Sentencia: S-026

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín el día 16 de junio de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

ILONIA JURKO VÁSQUEZ demandó a PROTECCIÓN S.A., a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los

aportes recibidos. Pretende además el reconocimiento de la pensión de vejez en los términos de la Ley 100 de 1993 desde la fecha de cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, junto con las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 2 de abril de 1966; que durante toda la vida ha prestado sus servicios a entidades del sector privado desde el 29 de noviembre de 1986, momento en el que se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; que en esa entidad alcanzó a cotizar un total de 502.14 semanas; que luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, fue contactada por un promotor comercial de PORVENIR S.A. sin explicarle las ventajas y desventajas de pertenecer a un régimen o a otro, las consecuencias de ese traslado de régimen pensional o las modalidades de pensión que allí se ofrecen; que se trasladó a esa entidad el 16 de julio de 1998; que tanto PORVENIR S.A., como PROTECCIÓN S.A. con posterioridad, omitieron su obligación de darle las explicaciones e informaciones requeridas para el traslado; y que su solicitud de retorno a la AFP COLPENSIONES ha sido negado por las entidades demandadas.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, PORVENIR S.A. señala de manera general que no le consta ninguno de los hechos de la demanda, indicando que cada uno de ellos deben ser probados en el curso del proceso y que de todas maneras los asesores de esa entidad le brindaron a la demandante las asesorías pertinentes para que la decisión de traslado de régimen pensional fuera libre, voluntaria e informada. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda y como excepciones propuso prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y compensación.

PROTECCIÓN S.A. acepta la fecha de nacimiento de la demandante y su afiliación a esa entidad, aclarando que la decisión adoptada fue basada en una manifestación libre y voluntaria. Se opuso además a las pretensiones de la demanda al considerar que nos encontramos ante un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento, realizado de forma libre y espontánea. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del Sistema General de Pensiones e inexistencia de la obligación de devolver la cuota de administración y la prima del seguro previsional.

Finalmente, la ACP COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante, su afiliación a esa entidad y el posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual, indicando que no le consta lo demás por tratarse de situaciones relacionadas con terceros que deben ser probadas en el curso del proceso. Se opuso además a las pretensiones por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Como excepciones propuso improcedencia de declarar ineficaz o nula la afiliación al Régimen de Ahorro Individual, prevalencia de la autonomía de la voluntad privada, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP, devolución de cuotas de administración, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses de mora e indexación, prescripción, imposibilidad de condena en costas y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 16 de junio de 2022, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, i) DECLARÓ la ineficacia del traslado efectuado por la demandante al Régimen de Ahorro Individual administrado por PORVENIR S.A. así como el posterior traslado dentro de ese mismo régimen, ORDENÁNDOLE a PROTECCIÓN S.A., trasladar a COLPENSIONES el saldo existente en su cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros; ii) ORDENÓ a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas y reactivar la afiliación de la demandante

al RPMPD; *iii*) ABSOLVIÓ a PORVENIR S.A. de todas las pretensiones de la demanda y a COLPENSIONES del reconocimiento de la pensión de vejez y *iv*) CONDENÓ en costas a PROTECCIÓN S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$1 '000.000.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de COLPENSIONES presentó recurso de apelación indicando que la demandante suscribió formulario de afiliación con la AFP PORVENIR y PROTECCIÓN cumpliendo los lineamientos fijados en la ley y reiteró su voluntad de permanencia en dicho régimen ya que ha estado conforme con todos los beneficios que ha disfrutado desde que ingresó al RAIS y solo hasta el año 2020 pretende volver al RPM, es decir que por más de 15 años disfrutó de todos los beneficios otorgados por el RAIS. La demandante no puede ser beneficiaria del régimen de prima media y mucho menos de una pensión de vejez al momento de cumplir el requisito debido a que presentó un traslado de régimen con la AFP Porvenir y Protección. Solicita revocar la sentencia en su totalidad con respecto al traslado de régimen.

A su turno, la apoderada de PROTECCIÓN S.A. solicita se aclare o se corrija que la demandante actualmente se encuentra vinculada es a la entidad AFP PORVENIR y no a PROTECCIÓN toda vez que aquella suscribió traslado en abril de 2012 y a la fecha antes de proferirse el fallo se encontraba vinculada a PORVENIR. También cuestiona lo relacionado a las costas impuestas a PROTECCIÓN ya que es la AFP PORVENIR la encargada de trasladar a COLPENSIONES todos los valores de la cuenta individual que tenga la afiliada, así como tramitar la ineficacia de la afiliación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término del traslado concedido a las partes, el apoderado de COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión a través de los cuales solicita se revoque la sentencia de primera instancia en cuanto a la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensiona. De mantenerse la decisión, solicita se ordene a los fondos privados el traslado de todos los conceptos recibidos, incluidos los rendimientos financieros y las cuotas de administración de acuerdo al criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia.

PORVENIR S.A. por su parte, solicita se revoque la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, advirtiéndole que, de ser confirmada tal decisión, no podrá ordenársele la devolución de cuotas de administración en tanto ello implicaría un enriquecimiento sin causa a favor de COLPENSIONES.

C O N S I D E R A C I O N E S:

Se procede a desatar los recursos de apelación interpuestos por la AFP PORVENIR S.A. y la ACP COLPENSIONES en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES en los temas no recurridos, conforme lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** ILONIA JURKO VÁSQUEZ nació el 2 de abril de 1966; **(ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 29 de noviembre de 1986, completando un total de 502.14 semanas de cotización; **(iii)** el 16 de julio de 1998 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la entonces AFP HORIZONTE S.A.; **(iv)** el 9 de febrero de 2001 se trasladó a la AFP PROTECCIÓN S.A.; y **v)** posteriormente se trasladó directamente a la AFP PORVENIR S.A. según formulario

del 23 de octubre de 2012, entidad en la que se encuentra vinculada en la actualidad.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993¹, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

¹ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 273 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar

entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado (a), con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia, sin que tampoco sea de recibo el argumento planteado por la ACP COLPENSIONES relacionado con que la demandante se trasladó dentro del mismo RAIS, lo que demostraría su intención de permanecer en ese régimen. Y no lo es porque al respecto también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral en múltiples providencias como la SL 5280 del 3 de noviembre de 2021, rad. 85801 en la que sostuvo claramente que *“... los traslados posteriores de un afiliado no pueden convalidar la actuación viciada en el traslado inicial, y como se ratificó en la sentencia CSJ SL1688-2019, las falencias en el suministro de información completa, veraz y efectiva sobre las consecuencias de un traslado, que pueden ocasionar su ineficacia, se deben examinar en el momento mismo del traslado y no con posterioridad”*.

Devolución cuotas de administración y demás conceptos.

De otro lado, en cuanto a la devolución de dineros distintos a los aportes obligatorios, tales como cuotas de administración, seguros previsionales, porcentaje de garantía de pensión mínima u otros conceptos, basta con indicar que, siguiendo aquellos mismos pronunciamientos de la jurisprudencia laboral, esta Sala ha considerado que es factible ordenar a las AFP correspondientes, la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación fallida, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto las cosas vuelve a su estado anterior, como si el traslado nunca hubiera existido.

En tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL4964-2018, SL2877-2020, SL5595-2021 o SL1637-2022, lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.”

Ahora, antes de establecer la obligación que a cada una de las entidades le corresponde como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, es preciso atender el cuestionamiento que hace la apoderada de PROTECCIÓN S.A. en su recurso de apelación, en el sentido de indicar que la obligada a la devolución del saldo existente en la cuenta de ahorro individual de la demandante es en realidad PORVENIR S.A.

En efecto, al verificar el material probatorio aportado al expediente, se observa que la demandante estuvo afiliada inicialmente al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hasta que el 16 de julio de 1998 decidió suscribir el formulario de vinculación a la AFP HORIZONTE

S.A., hoy PORVENIR S.A., luego de lo cual, el 9 de febrero de 2001, se trasladó a la AFP PROTECCIÓN S.A.

Sin embargo, resulta que el 23 de octubre de 2012 suscribió un nuevo formulario de vinculación, esta vez a la propia AFP PORVENIR S.A., motivo por el cual PROTECCIÓN S.A. remitió la totalidad del saldo existente en la cuenta de ahorro individual según se aprecia en la documental visible en las páginas 40 y siguientes del archivo 07 del expediente virtual, lo que le da la razón en su recurso siendo necesario entonces adoptar los correctivos del caso, es decir, modificar la orden en el sentido de que la encargada del traslado a COLPENSIONES de las cotizaciones recibidas durante la afiliación y los rendimientos financieros, es PORVENIR S.A.

De todas maneras, ello no implica que PROTECCIÓN quede relevada de todo tipo de obligaciones respecto de la demandante, pues tanto ella como la AFP PORVENIR S.A., según el criterio jurisprudencial indicado previamente, deben proceder con el traslado de todos los conceptos recibidos durante el tiempo que la señora ILONIA JURKO VÁSQUEZ estuvo vinculada a esa entidad, incluyendo, como debe ser, las cuotas y/o gastos de administración, sumas adicionales de las aseguradoras y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima.

Costas procesales.

En lo que tiene que ver con la condena en costas impuesta a cargo de PROTECCIÓN S.A., basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

En su caso particular, debe decirse que no fue su actuar el que generó la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional. Es decir, la señora JURKO VÁSQUEZ ya venía afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a la AFP PORVENIR S.A. y su afiliación a PROTECCIÓN S.A. fue producto de un movimiento dentro del mismo régimen, en tanto el traslado desde el entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ya se había producido, de manera que no fue propiamente su incumplimiento al deber de información el que dio lugar al presente proceso ni a la declaratoria de ineficacia de traslado.

En consecuencia, se revocará la condena en costas impuesta a PROTECCIÓN S.A., a quien se le ABSOLVERÁ por este concepto. En su lugar, las costas en primera instancia estarán a cargo de PORVENIR S.A.

En esta instancia no hay lugar a imponer costas.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el día 16 de junio de 2022, pero **1.** La **MODIFICA** en cuanto la entidad encargada del traslado del saldo existente en la cuenta de ahorro individual producto de las cotizaciones realizadas, junto con los rendimientos financieros, es la AFP PORVENIR S.A.; **2.** La **REVOCA** en cuanto se ABSOLVIÓ a ambas entidades del traslado de los valores recibidos por concepto de cuotas de administración, incluyendo porcentajes de seguros y reaseguros, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a esa entidad, para en su lugar CONDENAR a PORVENIR S.A. y a PROTECCIÓN S.A. a realizar

ese traslado; **3.** La **REVOCA** en cuanto condenó a PROTECCIÓN S.A. al pago de las costas en primera instancia, para en su lugar ABSOLVERLA por ese concepto. Esa obligación estará a cargo de PORVENIR S.A.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **536dc977ea65f7a99b54bf0b5afbe09a62d1d87e58c5b819f9cd453295181c4c**

Documento generado en 16/02/2023 02:22:45 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>